



Sr. Larry Sacks
Director USAID Colombia
Embajada de los Estados Unidos
Bogotá, Colombia

El 30 de octubre

Estimado Señor Sacks,

Queremos agradecer a la misión de USAID Colombia por su disposición a dialogar con WOLA sobre su programación en Colombia. Agradecemos enormemente el esfuerzo realizado por USAID para tener en cuenta nuestras preocupaciones y recomendaciones.

Por más de 10 años, contactamos a todos nuestros socios en Colombia para prepararnos para la consulta anual de derechos humanos. Luego recopilamos esa información y añadimos nuestro análisis dado nuestro monitoreo continuo de eventos en Colombia. Este año, preguntamos a los beneficiados y no recipientes de la asistencia de USAID como la asistencia de los Estados Unidos puede utilizarse de mejor manera para ayudar a abordar la crisis de seguridad que enfrenten los defensores de derechos humanos y los líderes comunitarios, consolidar la paz en los territorios y abordar la problema de coca.

La USAID debe seguir estando en la vanguardia para apoyar la consolidación del proceso de paz con las FARC en el terreno. Esta asistencia desempeña un papel vital y complementario para ayudar a garantizar la paz, los derechos humanos y la justicia en Colombia. Estamos en acuerdo con la atención especial de la Misión de USAID a los defensores de los derechos humanos, los derechos de los afrocolombianos, los indígenas y las víctimas, ya que son sectores que requieren un apoyo robusto. Además de apoyar el proceso de paz de las FARC, para que haya una paz completa, los Estados Unidos deben asistir al proceso de paz con el ELN y alentar fuertemente el desmantelamiento efectivo de los grupos delictivos ilegales y paramilitares.

Le pedimos que considere las siguientes recomendaciones:

1) La seguridad de los líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos

De acuerdo con nuestras acciones urgentes periódicas de WOLA sobre el tema, garantizar la protección de la sociedad civil después del acuerdo de paz requiere una respuesta

efectiva. Si bien es un problema de multidimensional (que sufre de complejidad, lejanía de ubicaciones y falta de voluntad política para abordarlo verdaderamente por parte de numerosos actores e instituciones en Colombia), la programación de los Estados Unidos puede ayudar.

En el aspecto institucional, USAID puede ayudar a consolidar los planes de protección municipal, fortalecer las capacidades de la Defensoría y Procuraduría para tener una presencia territorial efectiva y mejorar el trabajo de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía General. La fiscalía debe adoptar medidas más firmes sobre las amenazas y poner en la cárcel a los perpetradores de crímenes contra los defensores (tanto a los actores intelectuales como a los materiales). Abordar la corrupción dentro de la Unidad Nacional de Protección (UNP) podría ayudar a mejorar tanto el alcance como la calidad de su respuesta. También puede permitirles cubrir a más personas que necesitan protección. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) y otros sofisticados mecanismos de coordinación colombianos son muy escasos a menos que vayan acompañados de un mecanismo de aplicación que garantice la implementación de las recomendaciones. Colombia necesita pasar de la fase diagnóstica a abordar el problema y responder efectivamente a estos crímenes.

Procediendo al desarrollo de medidas colectivas de protección que tengan la aceptación de los beneficiados (comunidades afrocolombianos, Palanqueros, indígena y rurales) es un área que requiere una revisión. Hace cinco años, se hizo un esfuerzo para avanzar con estos y la Embajada de Estados Unidos tuvo un papel importante. Desafortunadamente, no se cumplieron. USAID puede empezar de nuevo y garantizar su terminación y aplicación en las comunidades más vulnerables. Otras entidades del gobierno de los Estados Unidos deben asumir un papel más proactivo al insistir en que los funcionarios colombianos hagan de esto una prioridad.

Con respecto a la sociedad civil, la USAID puede ayudar a fortalecer los mecanismos de autoprotección en entornos rurales y urbanos hasta que el sistema de protección y justicia sea lo suficientemente fuerte como para prevenir y garantizar completamente la seguridad de las personas específicas. Existe mucha experiencia dentro de Colombia sobre cómo gestionar y minimizar las amenazas. Se puede aprender mucho de organizaciones comprometidas como PBI, CONPAZ, y AFRODES sobre cómo sus experiencias podrían ser útiles y aplicables a muchas otras comunidades y grupos. También se pueden apoyar los mecanismos autónomos de las guardias indígenas y cimarrones.

Relacionado con el tema de la seguridad es la criminalización de las protestas sociales. A medida que Colombia avanza hacia el posconflicto, es importante que la actitud de las fuerzas de seguridad cambie de ver a los manifestantes como “enemigos internos” a actores vibrantes en la construcción de cambio. Las tácticas represivas de ESMAD y su respuesta de las protestas, incluidos los ataques cívicos en Buenaventura, siguen siendo muy

problemáticos. Tal respuesta del Estado solo genera un clima aceptable de estigmatizar, amenazar y atacar a los líderes y defensores de las comunidades. Paralelamente a los esfuerzos de seguridad para los activistas, se requiere la promoción del dialogo y el compromiso constructivo con los movimientos de protesta.

Por último, es importante que USAID trabaje con las autoridades colombianas para mejorar la protección de los beneficiados de sus programas. También alentamos a USAID a evaluar si su apoyo a la Fiscalía General y UNP incluye o no un enfoque diferenciado de género y minoría étnica. Si no es así, entonces deber ser corregido. Los informes que recibimos indican que la UNP todavía tiene muchos problemas para poder satisfacer las necesidades de protección de las comunidades rurales, afrocolombianos, indígenas, y LGBTI.

2) Subrayando la integración de las minorías étnicas y de género en la implementación posterior al acuerdo

Apreciamos todos los pasos dados por USAID y otras entidades del gobierno de los Estados Unidos para apoyar la inclusión de las minorías étnicas y el género en el acuerdo de paz con las FARC. A pesar de esto, el gran desafío de traducir el Capítulo Étnico de un documento a la acción permanece. Abordarlos será crucial para la sostenibilidad del proceso de paz en territorios mayoritariamente indígenas y afrocolombianos. Recomendamos que USAID apoye a la Comisión Étnica al proporcionar las herramientas necesarias para desarrollar un plan estratégico para la implementación del Plan Marco de Implementación. Asimismo, que brinde mayor respaldo a la Comisión Étnica para que puede realizar su trabajo de manera efectiva en las regiones de Chocó, Valle del Cauca y Nariño.

También queremos advertir contra el uso de terceros grupos (ONG, universidades y otras entidades) como operadores de programas para poblaciones indígenas y afrocolombianas. A lo largo de los años, hemos observado como esto crea divisiones y no es el mejor uso de los fondos. Más bien, el trabajo con las comunidades afrocolombianas e indígenas debe hacerse directamente con sus autoridades tradicionales, agrupaciones sectoriales y liderazgos populares tradicionales. Con demasiada frecuencia en Colombia vemos a los intermediarios de terceros grupos asumir el papel de decirles a estos líderes y comunidades qué hacer. Esto no solo es condescendiente, sino que también debilita su capacidad de liderazgo y, en última instancia, es ineficaz para lograr cambios en sus comunidades. Toda la programación de inclusión debe respetar las estructuras internas de las minorías étnicas, los líderes elegidos democráticamente y fortalecer la capacidad de estos líderes para satisfacer las demandas de sus electores. USAID debe trabajar para ver cómo puede financiar directamente tales autoridades y organizaciones. En lo que respecta a los esfuerzos de paz, sugerimos que se celebren reuniones bimensuales con representantes de la Comisión Étnica para abordar la dirección de la programación relativa a las minorías étnicas.

En términos de enfoque, ayudar a las minorías étnicas a consolidar la paz y su pleno acceso al sistema de justicia transicional es clave. Los mecanismos de alto nivel relacionados con las minorías étnicas y el género deben funcionar plenamente para garantizar que la aplicación de los programas de paz incluya un enfoque diferenciado que tenga en cuenta los derechos étnicos, de género y el liderazgo de estas poblaciones. El dialogo entre las minorías étnicas y el gobierno en el mecanismo étnico se rompió porque el gobierno colombiano no lo tomaba en serio y solo enviaba funcionarios de bajo rango sin capacidad para tomar decisiones. Además, de los más de 80 proyectos legislativos, decretos y programas diseñados para el proceso de paz, ninguno fue consultado con afrocolombianos y solo seis con indígenas. También fue descorazonador ver que la entidad establecida para garantizar la perspectiva de género en la implementación de los acuerdos no incluía a una mujer afrocolombiana.

Los esfuerzos en curso que construyen la capacidad de desarrollo económico de estas poblaciones, incluido el trabajo con la Cámara Nacional de Comercio Negro (NBCC) son importantes. El intercambio de experiencias en la diáspora afrodescendiente de auto-empoderamiento, construcción de capital y construcción de mercados es bueno. Debe ampliarse el trabajo realizado por la USAID para ayudar a salir de la pobreza a las poblaciones afrocolombianos e indígenas desplazadas, los jóvenes y las mujeres amas de hogar, mediante capacitación y colocación laboral en el sector público y privado. Esto ayuda a prevenir el empobrecimiento y el reclutamiento de jóvenes a grupos ilegales.

Por último, recordamos que el trabajo realizando con las minorías étnicas debe coordinarse con los objetivos del Plan de Acción Racial de los Estados Unidos y Colombia (CAPREE) y el Plan de Acción Laboral de los Estados Unidos y Colombia. Romper el racismo sistémico y la estigmatización de grupos étnicos de la sociedad colombiana debe ocurrir simultáneamente con estos programas. Además, la programación debe servir como un ejemplo para la sociedad colombiana en lo que respecta a defender los derechos laborales, consolidar y ampliar los sindicatos y defender los problemas de raza y género dentro el sector laboral de Colombia.

En términos de trabajo, a pesar de la reducción en los homicidios de sindicalistas, aún queda mucho por hacer en términos de subcontratación asegurar la negociación colectiva y proteger/expandir los sindicatos. Desafortunadamente, la represalia contra los sindicatos y el despido de los trabajadores por hablar sobre las injusticias sigue siendo la norma. La falta de cumplimiento adecuado de las pautas de seguridad ocupacional también ha llevado a muertes innecesarias de trabajadores, como fue el caso de 23 trabajadores afrocolombianos de construcción en Cartagena. Creemos que los esfuerzos de apoyo del Centro de Solidaridad de al AFL-CIO, la Escuela Nacional Sindical (ENS), el Consejo Laboral Afrocolombiano (CLAF) y Unión Portuaria son importantes.

3) Garantizar que la sociedad civil multinivel sea proactiva en los esfuerzos de justicia transicional

Si bien es importante apoyar el desarrollo de la arquitectura institucional para que Colombia pueda evaluar su pasado (Comisión para abordar grupos armados ilegales, unidades desaparecidas, JEP y la Comisión de la Verdad), recomendamos que se logre un equilibrio entre el apoyo de USAID a las instituciones gubernamentales y la sociedad civil. El gobierno colombiano tiene el financiamiento interno y capacidades sofisticadas de recaudación de fondos para financiar completamente sus instituciones. La sociedad civil colombiana, las víctimas, las minorías étnicas, las mujeres y las organizaciones LGBT están sufriendo los efectos del rechazo de donantes globales para apoyar a Colombia. Las razones de esto son muchas, incluida la crisis de migración/refugiados y la creencia de que Colombia es un país de ingresos medios que está en buena forma y no necesita ayuda. Desafortunadamente, si bien es cierto que Colombia es un país rico, su riqueza y recursos están distribuidos de manera desigual. De ahí los conflictos armados internos con las FARC y el ELN y las economías ilícitas. Los estados unidos deben financiar sólidamente a la sociedad civil en Colombia y alentar a otros donantes a hacerlo.

La fuerza de Colombia es su sociedad civil (ONG, líderes afrocolombianos e indígenas, sindicalistas, activistas comunitarios, académicos, expertos y periodistas). Es importante que USAID apoye la capacidad de esta sociedad civil para acceder, monitorear y desempeñar un papel activo en los mecanismos establecidos por el acuerdo de paz (entidades étnicas y de género de alto nivel, CSIVI, Comisión para Desmantelar Grupos Armados Ilegales, Comisión de la Verdad, JEP). Para que todos estos trabajos cambien la manera de pensar y avancen hacia la reconciliación, se requiera que las víctimas, las organizaciones LGBT pueden presentar casos emblemáticos a las JEP y contribuir al trabajo de la Comisión de la Verdad para que se integre el impacto que tuvo el conflicto en las minorías étnicas, las mujeres y las personas LGBT. El acuerdo es único en cuanto a la forma en que integra los derechos de las mujeres, por lo que la forma en que esto se lleva a cabo en el proceso de justicia transicional sirve como pruebas de fuego para que otros acuerdos de paz avancen. Este período después del acuerdo es una oportunidad histórica para romper ciclos pasados de la discriminación sistémica y desigualdad para afrocolombianos, indígenas, mujeres y víctimas. Puede ayudar a llamar la atención sobre problemas sociales más amplios de desigualdad de género y racial y la participación política de sectores excluidos. Al apoyar a la sociedad civil, la USAID puede ayudar a cambiar la narrativa nacional de ver a la sociedad civil como un enemigo u obstáculo para el progreso en una parte esencial de la construcción de la democracia.

Las ONG y los colectivos de abogados en Colombia requieren apoyo para que puedan trabajar para garantizar el desmantelamiento de las estructuras criminales ilegales, recopilar y analizar información, litigar y apoyar casos legales dentro del marco de la justicia transicional. Para que puedan informar a la sociedad colombiana y hacer su trabajo

de manera efectiva, requieren financiamiento. Los colectivos de abogados y las ONG serán un factor determinante en los casos presentados ante el JEP. Los Estados Unidos también pueden ayudar a la verdad, la justicia, la no repetición y la reconciliación mediante la desclasificación de documentos de los últimos 50 años de conflicto.

Más allá de la implementación de la paz, las áreas problemáticas que pueden ganar mucha tracción en Colombia incluyen la responsabilidad de las empresas en lo que respecta a los derechos humanos y la deforestación y las preocupaciones ambientales en las áreas donde las FARC se desmovilizaron.

4) Restricción legal en materia terrorismo dificulta la ayuda de USAID

Por último, expresamos nuestra más profunda preocupación por la restricción legal de financiación de USAID. Creemos que esto obstaculiza seriamente la capacidad de USAID para participar plenamente en el entorno post-conflicto e impide que se pueda abordar algunas de las áreas más necesarias para la construcción de la paz. Si bien estamos de acuerdo en que la USAID todavía puede apoyar muchos aspectos de la paz con la restricción, sería preferible que se limitara de esta manera.

El área que ha ocupado la mayor parte del discurso en Washington, DC sobre Colombia es sobre el número de hectáreas coca y las drogas. Se está ejerciendo una gran presión sobre el gobierno colombiano para que haga algo al respecto, pero Estados Unidos está brindando poca ayuda. Desafortunadamente, los remedios ofrecidos sobre lo que se puede hacer al respecto son limitados debido a la restricción. En muchos sentidos esto no solo es inútil sino también contradictorio.

Cuando se trata del capítulo sobre drogas del acuerdo, cuyo éxito es esencial para garantizar el cambio en la producción de coca y el narcotráfico, la restricción legal restringe el financiamiento de los EE. UU. Los EE. UU. (USAID y otros) deben ser pacientes con el problema de la coca e intentar ayudar a Colombia a abordarlo. No hay una solución rápida. Todos los esfuerzos sostenibles requieren una visión a largo plazo. Los EE. UU. no deberían presionar a Colombia para que realice esfuerzos de erradicación forzada que rompan con los acuerdos acordados en materia de drogas con las comunidades rurales. Como indican la reciente masacre e incidentes de Tumaco y en otras partes del país, hacerlo solo generará más conflictos entre las autoridades colombianas y campesinas.

Más bien, los Estados Unidos deben invertir el apoyo a los planes de desarrollo rural integrado, PNIS, PDETs, PATR, infraestructura y mercados regionales y programas de desarrollo para las comunidades rurales. Los Estados Unidos también podrían trabajar con Colombia para fortalecer los esfuerzos de lavado de dinero. Recomendamos un apoyo y un

papel constructivo en la conferencia internacional sobre drogas que se acordó en los acuerdos de La Habana.

En términos de la reintegración de los excombatientes, su plena reintegración y su capacidad para vivir una vida legal no violenta será determinante para el éxito a largo plazo de la paz. USAID sin esta restricción podría desempeñar un papel dada su experiencia en otros países latinoamericanos para ayudar a solidificar esto. En particular, aproximadamente el 30% de los excombatientes son mujeres y se podría hacer mucho para ayudarlos a transitar hacia roles productivos que ayuden a mejorar la sociedad colombiana. Planes como ofrecer a excombatientes opciones de trabajo como guardabosques y protectores del medio ambiente también se ven obstaculizados por la restricción. Más allá de las drogas y los excombatientes, la restricción también limita la capacidad de USAID de ayudar a la reconciliación y otros esfuerzos en muchas regiones de Colombia. Si bien comprendemos que existe una licencia OFAC para trabajar con un número limitado de niños excombatientes, creemos que la exención debe ampliarse para incluir más áreas.

Por último, nos gustaría solicitar más información sobre los siguientes proyectos que mencionaron en la reunión:

- Proyecto de Buenaventura entre las comunidades y la autoridad Puerto
- Proyectos de las comunidades mineros con AngloGold
- Proyectos en La Guajira

En conclusión, reiteramos que hay muchos aspectos del programa que funcionan bien. El propósito de esta carta es resaltar las dificultades y recomendar formas de avanzar. Vemos resultados positivos en el trabajo realizado con CODHES, Pastoral Social, minorías étnicas, medios de comunicación independientes y organizaciones LGBTI. Algunos ejemplos incluyen el trabajo de apoyo a la Comisión Étnica y los esfuerzos de LGBTI en Bajo Cauca y Córdoba. Una vez más, esperamos continuar este diálogo con ustedes a medida que Colombia avanza en la construcción de un nuevo entorno post-acuerdo.

Sinceramente,

Gimena Sanchez
Coordinara Principal para el Programa de los Andes